V Congreso Latinoamericano de Ciencia Política. Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, Buenos Aires, 2010.

La Revolución Ciudadana y las perspectivas de la polarización política en el Ecuador.

Ramirez Gallegos Franklin.

Cita:

Ramirez Gallegos Franklin (2010). *La Revolución Ciudadana y las perspectivas de la polarización política en el Ecuador. V Congreso Latinoamericano de Ciencia Política. Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, Buenos Aires.*

Dirección estable: https://www.aacademica.org/000-036/916

ARK: https://n2t.net/ark:/13683/emPm/5Hz

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto*. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: https://www.aacademica.org*.

La Revolución Ciudadana
y las perspectivas de la polarización política en el Ecuador

franklin ramírez gallegos
framirez@flacso.org.ec

FLACSO – Ecuador
Programa de Estudios Políticos

Resumen: El texto analiza los cambios en las dinámicas de polarización política en los tres años de gobierno de Rafael Correa. Se observa así, por un lado, la configuración de un escenario de polarización simple entre 'ciudadanos virtuosos' y 'partidos perversos' en el marco de una estrategia confrontacional del nuevo Presidente con el establecimiento político. Dicha estrategia se habría dirigido desde el tercer año de gobierno, no obstante, contra ciertos sectores sociales que inicialmente aparecieron, sino como aliados del gobierno, sí como parte del "campo progresista" que ha impulsado la salida del neoliberalismo desde los años 90.

Trabajo preparado para su presentación en el V Congreso Latinoamericano de Ciencias Políticas organizado por ALACIP, Buenos Aires-Argentina, 28-30 de julio 2008

1. **Nueva movilización social y consagración del anti-partidaria**

El 20 de abril del 2005 se consumó en el Ecuador el tercer derrocamiento presidencial en menos de diez años. El Crnl. Lucio Gutiérrez –quien, a su vez, había encabezado la asonada indígena-militar que expulsó del poder al demócrata-cristiano Jamil Mahuad en el año 2000- fue depuesto en medio de inmensas movilizaciones ciudadanas en contra de la intervención del poder ejecutivo en el poder judicial y de la pulverización de las mínimas instituciones del Estado de derecho.

La incapacidad del Congreso Nacional para fiscalizar tales acciones lo colocaron, también, en el centro de contestación social al orden político imperante. La multitud movilizada no demandaba, únicamente, la cabeza del Presidente: al igual que en las protestas argentinas de fines del 2001, los ciudadanos sublevados exigían "*que se vayan todos*". En las revueltas de abril, y en el recambio de la clase dirigente a la que dieron lugar, se condensaron, en efecto, un conjunto de factores que marcarían el contexto de oportunidad política en el que un nuevo movimiento político denominado Alianza País (AP), liderado por el joven economista de izquierda Rafael Correa Delgado, alcanzó el acceso al poder en noviembre del 2006: la pulverización de la legitimidad partidaria, la emergencia de nuevas organizaciones ciudadanas y sociales, y el esbozo de una nueva agenda pública.

Así, aunque la ilegitimidad de los partidos políticos y el desgaste del poder legislativo se venía consumando nítidamente desde hace, al menos, una década –el primer derrocamiento presidencial (de Abdalá Bucaram) tuvo lugar en febrero de 1997- fue en el curso del régimen gutierrista en que el Ecuador asistió al período de mayor *visibilidad* del proceso de des-institucionalización del sistema democrático en veinte y ocho años de regímenes civiles casi continuos. Los modos de operación de la clase política quedaron expuestos a raíz de la disputa entre el oficialismo y la oposición por el control de los principales organismos del Estado. La arena legislativa se vio atravesada por una verdadera '*guerra sucia partidaria*' por estabilizar o recomponer la correlación de fuerzas que había permitido al régimen destituir inconstitucionalmente a la Corte Suprema de Justicia para colocarla bajo el control de sus allegados: amenazas, compra de conciencias, difamaciones e intentos de sobornos derruyeron toda táctica de persuasión y argumentación racional de las diferencias y redujeron la acción partidaria a la pura lógica de la preservación o el viraje de la mayoría (Ramírez Gallegos, 2005).

Quedaba evidenciado así, en toda su magnitud, el férreo control partidario de la justicia y, sobre todo, el arbitrario dominio de la clase política sobre las instituciones democráticas a costa de cualquier garantía procedimental para el ejercicio de la soberanía popular. Diversos sectores de la opinión pública consagraron, desde entonces, el neologismo 'partidocracia' para ubicar las fuentes del bloqueo democrático del país. El manifiesto anti-partidismo ciudadano se encontraba en uno de sus puntos más altos.

A diferencia tanto de la destitución de Abdalá Bucaram en 1997, cuando las movilizaciones sociales fueron encabezadas por los partidos y movimientos sociales –sobre todo la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE)-, como del derrocamiento de Jamil Mahuad en enero del 2000, cuando el protagonismo y los habituales modos de protesta del movimiento indígena y de unas incipientes Asambleas Populares se enlazaron con mandos medios del ejército, las jornadas de abril 2005 fueron

resultado del progresivo *desborde ciudadano* tanto de la tutela partidista como del comando de cualquier estructura organizativa. El tercer derrocamiento presidencial fue, así, fruto de un conjunto de movilizaciones sin ninguna dirección política organizada. No eran los partidos políticos los únicos actores colectivos contestados por la ciudadanía. Comenzando por el movimiento indígena, ningún otro movimiento social o político pudo liderar tampoco la protesta ciudadana. Era la primera vez, desde el levantamiento indígena de 1990, que las dinámicas de movilización social no giraban en torno a, o no estaban lideradas por, el movimiento indígena que había sido el actor hegemónico del campo de la protesta popular hasta antes de su presencia, durante el primer semestre del 2003, en la coalición gobiernista liderada por el partido del Crnl. Gutiérrez.

El lugar de los partidos y movimientos fue ocupado por una pluralidad de individuos sin filiación organizativa y de nuevas asambleas y/o redes *ciudadanas*: un radical anti-partidismo era el cemento unificador de tan heterogénea movilización. La antinomia 'ciudadanía versus políticos' trazó las fronteras del conflicto. Cualquier noción de representación política era contestada por un discurso en que la utopía de la autogestión societal se colocaba en el centro de la refundación de '*La República sin partidos*'.

El derrocamiento de L. Gutiérrez supuso a la vez un giro en la agenda pública ecuatoriana. El nuevo Presidente del país, Alfredo Palacio, dio ciertas señales de distanciamiento con la agenda del Consenso de Washington y con el acercamiento del país al Plan Colombia y a la política de cooperación plena con los Estados Unidos. Tales decisiones posicionaron en el debate político discursos nacionalistas que reivindicaban la idea de la soberanía nacional e insistían en la crítica a la apertura comercial. Es así que el nuevo gobierno optó por la caducidad del contrato con la petrolera norteamericana OXY –decisión percibida por los Estados Unidos como una suerte de expropiación unilateral- y, luego de contundentes movilizaciones indígeno-campesinas, postergó la decisión de continuar las negociaciones bilaterales sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los EEUU. El giro en la política petrolera hizo que el gobierno norteamericano suspenda definitivamente la posibilidad de firmar un TLC con el Ecuador. Aún así, Palacio reformó la Ley de Hidrocarburos en la perspectiva de mejorar los ingresos estatales provenientes de una renta petrolera en ascenso debido a los altos precios del crudo en el mercado internacional.

La designación de Rafael Correa como Ministro de Economía –el primero que, desde inicios de los años noventas, no provenía de círculos empresariales ni estaba atado al canon fondomonetarista- fue decisiva para la reorientación de tales excedentes presupuestarios hacia un incremento del gasto social (en detrimento, además, del pago de la deuda externa). Dicha decisión estuvo acompañada de una fuerte crítica a las recomendaciones de austeridad fiscal de los organismos multilaterales de crédito. Correa, y el círculo de economistas progresistas cercanos a él, postulaban más bien la necesidad de una mayor presencia estatal en la economía y en la redistribución de la riqueza social. Aún a pesar de su breve paso por el ministerio por discrepancias con el Presidente, Correa y sus allegados habían alcanzado ya cierta notoriedad y prestigio públicos[1].

[1] Ver Ibarra H., 2006, "La victoria de Rafael Correa y la ola progresista en América del Sur", Revista Ecuador Debate, Quito, No. 69, diciembre.

El gobierno de Alfredo Palacio no cumplió, sin embargo, con uno de los principales cometidos que las movilizaciones de abril le habían demandado: la reforma política y la *despartidización* de las principales instituciones del Estado por medio de una consulta popular y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. La oposición de los partidos políticos en el seno del Parlamento y los múltiples errores de negociación del poder ejecutivo cancelaron dicha posibilidad y dejaron abierta la opción para que, en las elecciones de octubre 2006, puedan posicionarse abiertamente las agendas de cambio político radical.

2. **La construcción de una liderazgo transformacional**

La agenda electoral estuvo entonces enmarcada por el problema de la reforma política entendida, *tout court*, como el intento por despartidizar el orden político ecuatoriano. El discurso de la reforma estatal y del ajuste estructural fue así desplazado del centro del debate político. Ello no era casual: el malestar social con las políticas neoliberales había crecido desde inicios del nuevo siglo. Según las cifras del Latinobarómetro, por ejemplo, la confianza en la economía de mercado decayó en el Ecuador casi veinte puntos entre 1999 y 2005; se podía detectar, de igual modo, una demanda por mayor presencia y actividad estatal (Tabla 1). Las demandas de las activas y recién nacidas organizaciones ciudadanas por la instalación de una Asamblea Constituyente prefiguraban el imaginario de que aquella sería el instrumento idóneo no sólo para encausar la reforma política sino, además, para poner fin al ciclo neoliberal inaugurado con la crisis de la deuda externa a inicios de los 80.

Cuadro 1.

Percepciones ciudadanas sobre Estado y Mercado en el Ecuador: 1998-2007*

	1998	2000	2002	2003	2004	2005	2007
Confianza en economía de Mercado	73	61	54				44
Economía de mercado es el único sistema con el que el país puede llegar a ser desarrollado				45	51	59	40
Empresa privada es indispensable para el desarrollo					66	59	43
Estado puede resolver todos los problemas	25	30		23		20	38

Fuente: Latinobarómetro, 2007. Elaboración: propia.

* La fuente consultada no presenta datos para todos los años

La campaña electoral de Rafael Correa Delgado sintonizó con tal estructura de demandas. AP se presentó como un nuevo movimiento *ciudadano*, ajeno a toda estructura partidista, comprometido con la convocatoria a una Asamblea Constituyente y empeñado en sacar al país de la "larga noche neoliberal" como gusta repetir el ahora Presidente del Ecuador.

El ballotage puso frente a frente a R. Correa y al multimillonario bananero Álvaro Noboa quien afirmaba una vía patrimonialista de la política en cuyo centro se colocaba la

posibilidad de relanzar la agenda neoliberal y recomponer los vínculos con el eje Washington-Bogotá. Su dispendiosa campaña electoral -la tercera desde 1998- reprodujo tradicionales mecanismos clientelares que le permitieron ganar la primera vuelta y encabezar las encuestas hasta una semana antes del segundo turno. El triunfo de Correa el 26 de noviembre del 2006 -con catorce puntos de ventaja- reflejó una fuerte aversión ciudadana a la figura de Noboa. El voto 'duro' de Correa alcanzó apenas un 23% del electorado en la primera vuelta: su victoria reflejaba, sin duda, la preeminencia de un voto negativo –lo que Pierre Rosanvallon (2007) denomina como 'de-selección'- sobre cualquier forma consistente de voto programático o ideológico.

Cuadro 2.
Votación presidencial en la primera y segunda vueltas
1998 -2006

Elección	Candidatos finalistas	Primera Vuelta	Segunda Vuelta
1998	Jamil Mahuad (DP)	35%	51%
	Alvaro Noboa (PRE)	27%	49%
2002	Lucio Gutiérrez (PSP-PK)	20%	55%
	Alvaro Noboa	17%	46%
2006	Rafael Correa (Alianza País)	23%	57%
	Alvaro Noboa (PRIAN)	27%	43%

Fuente: Ibarra, 2006.

El marcado acento anti-partidario de la campaña electoral de Rafael Correa recogía, en gran parte, las demandas de renovación de las elites dirigentes que portaban algunas emergentes dinámicas organizativas y el grueso de la "ciudadanía indignada". A su vez, sus propuestas de convocar a una Asamblea Constituyente, rechazar la firma del Tratado de Libre Comercio, demandar el fin del acuerdo para la concesión de la Base de Manta a las fuerzas militares estadounidenses, detener el avance de la agenda neoliberal, y privilegiar el gasto social al pago de la deuda externa, entre otras, ocuparon prácticamente el mismo campo discursivo y programático que el movimiento indígena ecuatoriano (MIE), otras organizaciones populares (campesinos, mujeres, obreros, colectivos alter-globalización, ecologistas) y pequeñas fuerzas de izquierdas avanzaron desde inicios de los años 90.

Sucedía, sin embargo, que el acceso al poder de Rafael Correa se colocaba en medio de un reacomodo del campo progresista ecuatoriano: entre el ascenso de nuevos liderazgos, fuerzas sociales y organizaciones *ciudadanas* –de escasa trayectoria y capital militante- y la segmentación, repliegue y declive del movimiento indígena[2], en torno de cuya acción colectiva se re-articularon y catapultaron viejas y nuevas formaciones, sociales y políticas,

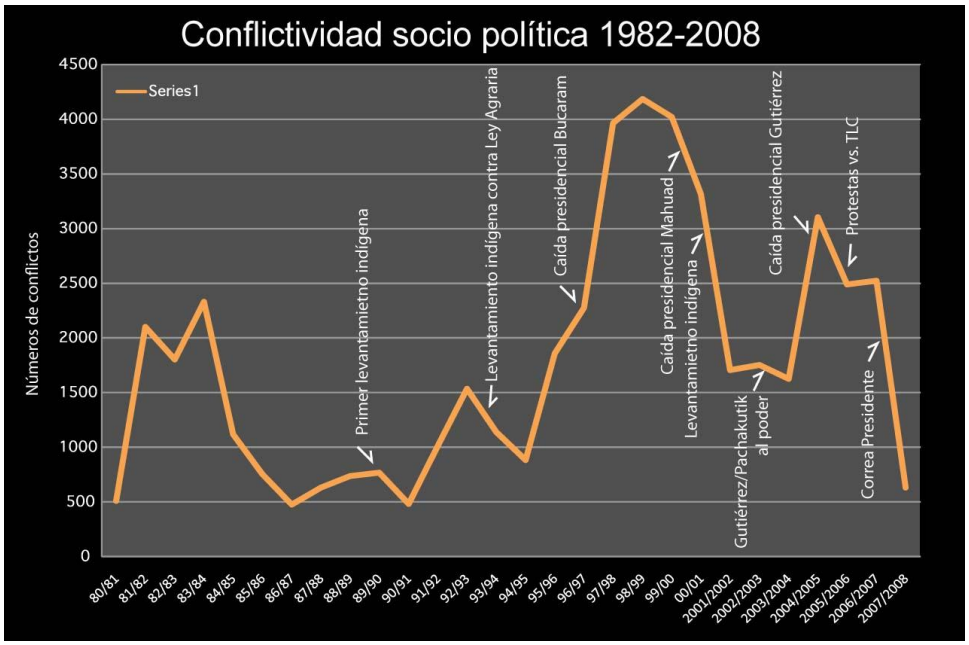
2 No es este el lugar para demostrar la inminencia del fin de un ciclo de alto protagonismo político e intensa movilización indígena en el Ecuador. Sin embargo cabe puntualizar que no se trata, únicamente, de los pésimos resultados electorales de Pachakutik en los comicios del 2006 (al respecto ver V. Bretón y S. Báez, 2006) sino, entre otros, de la intensa fragmentación política y organizativa del movimiento; de la pérdida de representatividad social del discurso de la CONAIE tanto a nivel de las comunidades indígenas como de los sectores urbanos; del repliegue étnico de sus estrategias políticas; y de la pérdida de la credibilidad de que tanto gozó el movimiento antes de su paso por el poder (2003) en alianza con el Crnl. Lucio Gutiérrez.

de la izquierda ecuatoriana a lo largo de los años 90. En las elecciones de fines del 2006, de hecho, la candidatura presidencial por Pachakutik (brazo electoral del movimiento indígena) de Luis Macas –histórico dirigente indígena- apenas alcanzó el 2,19 % del total de los sufragios. El otro candidato de izquierdas –proveniente del Movimiento Popular Democrático (MPD), que aparece como representante del gremio docente y que tiene una línea pro-china- llegó tan solo al 1,33 % de la votación. Para el caso de Pachakutik se trataba del peor resultado desde el arranque de su participación electoral en 1996.

El reacomodo del campo progresista no se remite únicamente al deterioro electoral de las más o menos convencionales fuerzas de izquierda en las segundas elecciones generales del siglo XXI. También alude a la debilidad del campo del conflicto y de la movilización social. A lo largo de los años 90, buena parte de la izquierda ecuatoriana se catapultó a la escena política por la vía de su acompañamiento a o de su participación directa en el proceso de conflicto político abierto por los movimientos sociales, y de modo particular, por las organizaciones indígenas. Su demanda por reconocimiento identitario y por la declaración del Estado como Plurinacional se articuló con la resistencia a las políticas de ajuste estructural. La centralidad de la disputa étnica y del conflicto redistributivo se engarzaron, entonces, para proyectar al movimiento indígena como eje articulador de un conjunto de actores sociales y políticos anti-neoliberales. Tal fue el principal sentido del programa político del arco de fuerzas progresistas durante los noventa.

La masividad de la conflictividad social catapultó a dichas fuerzas al centro del debate político, contuvo diversas iniciativas regresivas (por ejemplo, bloqueó el avance del proyecto de Ley de privatización del agua en 1994), alteró profundamente los órdenes de poder (tres derrocamientos presidenciales se sucedieron a la luz de masivas movilizaciones callejeras) y contribuyó a acelerar la crisis de legitimidad del sistema de partidos. Para el primer lustro del nuevo siglo, sin embargo, el espiral ascendente del conflicto social comenzaba a detenerse y, salvo ciertos picos de movilización social -durante la caída de Gutiérrez (abril 2005) y en los días de las marchas contra el TLC (marzo 2006)- la tendencia hacia un declive pronunciado de la dinámica contestataria se hacía bastante nítida (ver Gráfico 1). El ciclo 'alto' de la movilización social –entre mediados de los 90 e inicios del 2000- se desvanecía. Para cuando Correa surge como candidato resultaba muy difícil de ignorar el agotamiento de las energías reivindicativas y organizativas[3] de la sociedad. Nadie pareció sorprenderse, por ello, cuando Noboa ganó con comodidad el primer turno de las presidenciales. De cara al ballotage el pesimismo del campo progresista era inocultable.

[3] Ello coincide, además, con una también nítida tendencia al decrecimiento de las tasas de participación popular en diversas esferas de movilización pública desde inicios del nuevo siglo: asociacionismo, trabajo comunitario, participación local (municipios), protesta social. Ver al respecto F. Ramírez, 2010.



Fuente: CAAP

Es en medio del declive de la izquierda electoral, de la pérdida de centralidad política del movimiento indígena, y del deterioro de las tendencias a la conflictividad social que surge la candidatura de Rafael Correa y se produce la formación de Alianza País (AP). Dicho escenario habría pesado a la hora en que los ideólogos del nuevo movimiento privilegiaran, antes que la construcción de un frente amplio o de una coalición de movimientos y partidos, la rápida formación de una estructura organizativa *propia* y *diferenciada* de aquellos. Gustavo Larrea, uno de los fundadores y dirigentes de AP, señalaba al respecto:

> "Si entrabamos a esas disputas (con las organizaciones) no teníamos posibilidades de construir fuerza política inmediata ya que el movimiento obrero, el movimiento indígena, el afro ecuatoriano, de derechos humanos, el movimiento de mujeres, tienen liderazgos legítimos que se han ganado a lo largo de la historia y con los cuales no hay por qué disputar…Nuestra organización resuelve no realizar coaliciones con frentes sociales sino trabajar territorialmente" (Larrea, 2008: 129).

El núcleo fundador de AP estuvo compuesto por antiguos dirigentes de partidos de la izquierda tradicional, por intelectuales y activistas de la nueva izquierda social, por figuras provenientes de novísimas organizaciones ciudadanas, y por personajes sin trayectoria militante, y más bien cercanos al entorno personal del candidato presidencial. Emergía así una fuerza heteróclita amalgamada bajo el horizonte de un anti-partidismo extremo, la voluntad de superar el neoliberalismo, y el peso del liderazgo de Correa. Dicho perfil y composición entrañaban no solo una ampliación del espectro de la representación social de las fuerzas de izquierda hacia lo que Quintero denomina "los sectores sociales auxiliares o las clases intermedias de la estructura global del país"[4], sino además una reorientación en

[4] Se trata de "los sectores sociales intermedios, urbanos y rurales, los trabajadores asalariados no proletarios, la pequeña burguesía urbana y rural, intelectuales, burócratas, profesionales urbanos y rurales, pequeños y

sus lógicas de acción política y, sobre todo, un reajuste en los equilibrios entre el liderazgo individual y las dinámicas de acción colectiva cercanas a la tendencia. El peso de estas últimas fue, desde los orígenes de AP, relativizado por los intentos de llegar al tejido micro-local de la sociedad:

> "Se resolvió también promover un tipo de organización familiar, no se trabaja solamente con los individuos. Son encuentros familiares de carácter geográfico… Esta definición generó un enorme contingente de compañeras y compañeros que en vez de dedicarse a pelear con otras fuerzas de izquierda, se dedicó a construir fuerza en cada cantón, en cada parroquia, en cada barrio" (Larrea, ibid.)

Desde la primera campaña AP puso en marcha, en efecto, los denominados Comités Ciudadanos Locales o Comités Familiares. A través de una estrategia de penetración territorial, ello proyectaba la base del recién nacido movimiento -más allá de la constelación asociativa- hacia el amplio espectro de ciudadanos no organizados. La articulación con partidos y movimientos de mayor trayectoria organizativa fue siempre vista como innecesaria y potencialmente conflictiva. El acuerdo, más bien marginal, con el pequeño Partido Socialista Ecuatoriano ha sido la única salvedad. La debilidad del tejido organizativo, la desconfianza entre las fuerzas progresistas, y el pragmatismo del nuevo movimiento hacían prever que, en adelante, tal lógica de construcción política sería reforzada.

3. Cambio constitucional y estrategia anti-sistémica

La riesgosa decisión de AP de no presentar candidatos para el Congreso Nacional, en las elecciones de septiembre-2006, delineó la identidad política originaria del movimiento y prefiguró la estrategia de cambio político radical que Correa conduciría en caso de llegar al poder. Tal opción no sólo expresaba su voluntad de sintonizar con una ciudadanía abiertamente hostil al mundo de los partidos, sino que definía un rasgo estructural del proyecto político correísta: su marcado carácter anti-sistémico. Dicha "identidad de base" explicaría su fulgurante éxito político pero habría de determinar un conjunto de ambivalentes efectos en su accionar y como fuerza gobernante y como actor mayoritario de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) instalada entre noviembre 2007 y julio 2008.

La distorsión de la representación política, inflada por la decisión de AP de abstenerse de presentar candidatos al Parlamento, era un 'dato duro' que favorecía la legitimidad de la estrategia presidencial de convocar a una ANC de plenos poderes y de demandar el cese de funciones del Congreso. En 14 de las 22 provincias ecuatorianas, los parlamentarios electos habían sido derrotados por la opción del voto nulo que Correa promocionó como parte de su estrategia anti-partidaria.

Correa aparecía así como el único presidente de la historia moderna de la democracia ecuatoriana que no sólo ganaba unas elecciones sin sostenerse en partido político alguno, sino que empezaba a gobernar sin un bloque afín en el Congreso. Sin representación

---

medianos comerciantes, transportistas, obreros en activo, y muchos empresarios individuales –no corporativizados- con ideas nacionalistas" (2007: 41).

parlamentaria propia y con la derecha controlando la mayoría[5], la convocatoria al referéndum que diera paso a la ANC fue objeto de una intensa pugna entre los dos principales poderes del Estado. Si anteriores crisis políticas se resolvieron con las destituciones presidenciales de jefes de gobierno sin sólidos bloques parlamentarios y con baja credibilidad social, en el 2007 sucedía lo inverso: un Presidente cuyo único capital político era el robusto apoyo popular a su figura provocaba, sin estricto apego a derecho, la destitución –por parte del Tribunal Supremo Electoral- de 57 diputados acusados de obstruir ilegalmente la convocatoria a la consulta popular. La "caída parlamentaria" viabilizó el proceso constituyente.

En este escenario, el gobierno de la Revolución Ciudadana –como se denomina oficialmente al proceso político abierto con la llegada de Correa al poder- no solo embistió contra los partidos políticos. La banca, los medios de comunicación y, sobre todo, la elite económica de Guayaquil -en la figura de su Alcalde y máximo exponente de la demanda autonómica del Ecuador, Jaime Nebot- se convirtieron en el blanco de continuos ataques presidenciales. La polarización política se decantaba como eje de la estrategia presidencial en procura de favorecer el respaldo ciudadano a la tesis de encaminar y hegemonizar el proceso constituyente: se trataba de colocar nítidas fronteras entre el 'campo del cambio' y el 'campo de la reacción'.

La confrontación permanente de Correa con los 'poderes fácticos' le han valido más de una crítica en la opinión pública dominante, por la escasa vocación para abrir el diálogo, pero redundó en altos réditos para AP en los sectores medios, subalternos y plebeyos del Ecuador que han visto en tal estilo de conducción una señal de coherencia y efectiva ruptura con el pasado. De algún modo ello recuperó el valor y la confianza social en "las palabras de la política"[6]. El éxito de la estrategia de polarización y de la opción anti-sistémica de Correa se confirmó en al amplísimo triunfo del SI en el referendo para convocar a la Constituyente –8 de cada 10 ecuatorianos votaron afirmativamente- y con el triunfo de AP en las elecciones para dignidades asamblearias. No solo que el oficialismo alcanzó 80 de las 130 curules en juego -las otras fuerzas de izquierda coparon casi un 10% de la representación política en la asamblea- sino que, por primera vez en los últimos 27 años de regímenes civiles, la distribución territorial del voto no reflejó los históricos clivajes regionales del país (costa/sierra, Quito/Guayaquil sobretodo): AP triunfó en Guayaquil –donde hace casi dos décadas el derechista Partido Social Cristiano (PSC) ha controlado todos los resortes del poder local- y prácticamente en todo el territorio nacional.

Tabla 3.
Elección de Asambleístas Nacionales (septiembre 2007)
Composición Asamblea Nacional Constituyente

Mov./Partido (resultados voto por lista completa o	Total escaños	%

[5] Hago referencia al PRIAN de Álvaro Noboa, al PSC del Alcalde de Guayaquil Jaime Nebot, al PSP del ex presidente Lucio Gutiérrez, y a la UDC del ex Presidente Jamil Mahuad.
[6] Ver P. Ospina, 2008, "Entresijos de una encrucijada", Nueva Sociedad No. 213, enero/febrero

cerrada)		
APAIS	**73**	**56,2%**
PSP	18	13,8%
PRIAN	8	6,2%
PSC	5	3,8%
RED	3	2,15%
MPD	3	2,15%
APAIS/PS-FA	**3**	**2,3%**
UNO	2	1,5%
MUPP-NP	2	1,5%
PSP/RED	1	0,8%
PRE	1	0,8%
MUPP-NP/MPD	1	0,8%
MUPP-NP/MNPNS/MOPIN	1	0,8%
MPD/APAIS	**1**	**0,8%**
APAIS/MUSHUK INTI/AA	**1**	**0,8%**
APAIS/MIP	**1**	**0,8%**
APAIS/MIFA	**1**	**0,8%**
MHN	1	0,8%
MCIFY	1	0,8%
ID/MPD/PS-FA/MUPP-NP	1	0,8%
ID/MPC	1	0,8%
ID	1	0,8%
TOTAL	**130**	**100%**

*Se resaltan los asambleístas de Alianza País obtenidos por cuenta propia o en alianzas

Las fuerzas del centro y la derecha políticas quedaban, así, reducidas a su mínima expresión y sin posibilidades de incidir en el debate constitucional. Correa y AP ocuparon todo el espacio político y permitían prefigurar la constitución de un nuevo actor político de sustento y vocación hegemónica nacional.

4. El fin de un ciclo político

Aunque el propio Correa, y el discurso conservador que se le ha opuesto, pretendan que el hundimiento de los partidos y la fragilidad institucional son, en lo fundamental, efecto de su voluntad política, lo cierto es que ambos factores ya estaban instalados en la estructura de oportunidad política sobre la que ha sido posible el veloz posicionamiento de su agenda de cambio. El vacío político -debilidad de actores colectivos y crisis institucional- antecedió a la gestión del nuevo gobierno. Este no hizo sino exacerbar la ilegitimidad del viejo orden a través del cumplimiento eficaz de sus ofertas de campaña y de la recuperación del extenso sentimiento anti-partidario de la población.

El descalabro institucional del Ecuador se había originado, en efecto, doce años atrás con los sucesivos enfrentamientos entre los principales grupos económicos, elites políticas y sectores dominantes por la orientación de la agenda neoliberal y la dirección de las intervenciones estatales en función de intereses económicos particulares. El enjuiciamiento

político (1996) de León Febres Cordero a su ex ministro, co-ideario y para entonces vice-presidente de la República, Alberto Dahik, marcaba el inicio de un período de turbulento faccionalismo intra-elitario que impediría la plena implantación de la agenda ortodoxa en el país.

Tras el aparente consenso 'modernizador', el reordenamiento neoliberal no consiguió desactivar, y más bien estimuló, fuertes disputas por las orientaciones y el control de segmentos estratégicos del Estado entre fracciones dominantes que, a pesar de un discurso anti-estatista, han visto en él un factor determinante para activar determinadas dinámicas de acumulación en su favor (Barrera, 2001). Así, incluso si la derecha ganaba elecciones y lograba controlar largamente los espacios de representación política del país -dominó la arena legislativa desde inicios de los 90- no conseguía mínimos niveles de acuerdo político, entre los estratos y capas a los que representaba, para instaurar formas estables y coherentes de gobierno con capacidad de irradiar y ser reconocidas por el resto de la sociedad. Dicha atrofia hegemónica –para usar la expresión del sociólogo boliviano René Zavaleta Mercado- exacerbó la turbulencia del campo político y minó la legitimidad del orden democrático.

Las disputas facciosas se repitieron a lo largo de los tres derrocamientos presidenciales (1997, 2000, 2005) y de los diversos entrampamientos institucionales que vivió el país hasta el año 2007. La conflictividad intra-elitaria abrió el marco de oportunidades para el protagonismo, 'desde abajo', de diversos grupos, gremios, partidos y movimientos sociales opuestos al proceso de modernización liberal de la economía.

Hacia fines de los 90, en efecto, la protesta social no desmayaba. Sus blancos de ataque eran, a la vez, los modos de hacer política de las organizaciones partidarias imperantes y el avance de la agenda privatista-modernizadora que aquellas abanderaban. No era casual, entonces, que luego de las reformas constitucionales de 1998 se produjeran dos nuevos derrocamientos presidenciales (J. Mahuad en 2000 y L. Gutiérrez en 2005) acompañados de más o menos importantes dinámicas insurreccionales y movilizaciones sociales que prefiguraron la implantación de formas de control popular radical en el ordenamiento político ecuatoriano.

Dicho poder social, sin embargo, carecía de las capacidades y competencias, organizativas, estratégicas e ideológicas, para prefigurar y constituir órdenes alternos. Así, luego del derrocamiento del Presidente demócrata-cristiano J. Mahuad (2000), su inconsulta decisión de dolarizar la economía ecuatoriana fue reafirmada por su sucesor. El protagonismo del campo popular y las dinámicas de la movilización indígena no alcanzaron a socavar los resortes de poder de los grupos económicos y financieros que, sostenidos en el gobierno de Mahuad, fueron los responsables de la más grave crisis económica del Ecuador: el congelamiento de los depósitos y el feriado bancario decretado en marzo 1999. Tales decisiones apuntaron a salvaguardar los intereses bancarios eximiéndoles de asumir los costos de su gestión dispendiosa y corrupta. Una vez más como a lo largo del proceso de ajuste neoliberal, el gobierno, con el aval del Fondo Monetario Internacional, privilegió la estabilización y el salvataje del sector bancario en detrimento del sector productivo. La "década perdida" de los 1980 se repitió, así, en el Ecuador de los años 90: el promedio de la

tasa de crecimiento anual per cápita fue nulo (0%) mientras que "la producción económica por habitante en 1999 cayó a niveles semejantes a los de 1976" (SIISE 3.0).

Con el feriado bancario, los neoliberales ecuatorianos colocaron a la economía nacional en aguda recesión y dejaron emerger a luz pública los nexos regulares entre entidades claves del Estado, la clase política, y las elites económicas y financieras del país. Se ha tratado de acuerdos "oligárquico-mafiosos" (Ramírez Gallegos 2000:79), con altos niveles de organicidad, que han ocasionado que el Estado y el conjunto de la población asuman los costos de las crisis del sector privado. Aunque la crisis fue experimentada como un verdadero trauma colectivo y aunque determinaría el inicio del declive de la confianza ciudadana en la agenda liberal, la dolarización generó un efecto de re-articulación de los sectores empresariales, financieros, y de los partidos de centro-derecha y derecha[7] que continuaron, bajo la presidencia de Gustavo Noboa, en el bloque gobernante. Tales sectores veían en esta medida la posibilidad de destrabar la continuidad de la aplicación de la receta ortodoxa.

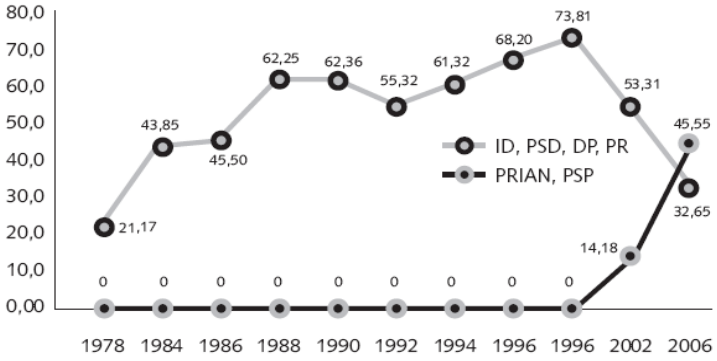
De algún modo, y a pesar del faccionalismo intra-elitario y de la resistencia social, así lo hicieron: para el ciclo 1998-2003, el índice de reforma estructural del Ecuador se ubicaba en 0.80 mientras que el promedio regional era de 0.838. De modo lento y discontinuo, la implementación de la agenda neoliberal –en una versión 'criolla' que implicaba, más que una plena des-estatización de la economía, un uso selectivo de las intervenciones estatales para precautelar intereses particulares- se había impuesto en un nivel comparable al del resto de la región. Los índices de confianza en los partidos y en el parlamento se ubicaban, sin embargo, entre los más bajos de América Latina.

En este escenario, ya en las elecciones de 2002, los partidos que habían auspiciado la transición democrática y compartido el poder político desde 1979 vieron reducir drásticamente su caudal electoral. Nuevas formaciones políticas -el Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN) de Álvaro Noboa y el Partido Sociedad Patriótica (PSP) del Crnl. Lucio Gutiérrez, ambas ubicadas como fuerzas convencionales e inclinadas hacia la derecha- empezaron a ganar protagonismo y a restar capital político a los cuatro grandes partidos ecuatorianos: el Partido Social Cristiano (PSC) y la Democracia Popular (DP, luego Unión Demócrata Cristiana, UDC) en el campo de la derecha, el Partido Izquierda Democrática (ID) en el centro-izquierda, y el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) calificado como partido 'populista' cercano a la derecha.

[7] El Partido Social Cristiano (PSC), el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), el Frente Radical Alfarista (FRA) y la Democracia Popular (DP), partido de gobierno, anunciaron el apoyo legislativo a la propuesta, con lo cual su viabilidad política estaba asegurada. Del mismo modo las Cámaras de Empresarios y Pequeños Industriales consintieron con la medida.

8 El índice va de 0 (ausencia de reformas) a 1 (alta aplicación de reformas de mercado). Para el conjunto de América Latina el IRE pasó de 0.58 en los años 80 a 0.83 entre 1998 y 2003. Ver, PNUD, 2004, La democracia en América Latina, Buenos Aires.

Evolución de apoyo a partidos tradicionales vs. nuevos partidos (1978-2005)



Fuente: Pachano (en prensa).

*En las siglas del gráfico constan dos errores: en lugar de PSD debería decir PSC, y en lugar de PR, debería decir PRE.

La des-composición del sistema de partidos heredero de la transición hacia la democracia comenzó, entonces, antes del acceso de Correa al poder. Si la configuración del poder legislativo del año 2002 había dejado como resultado que el PRIAN y el PSP -que en ese año llegó al poder- controlen el 14,18% de la representación, frente al 53,31% de los partidos tradicionales, en el año 2006 éstas últimas solo alcanzaban el 32,6% mientras que las nuevas formaciones llegaban al 45,55% (Freidenberg, 2008).

El arribo al poder de Lucio Gutiérrez -inicia su mandato en 2003- era ya revelador de la tendencia al ocaso de los partidos tradicionales en medio de un vacío hegemónico que se alimentaba de las pugnas intra-elitarias y de la movilización popular. La alianza indígena-militar que lo llevó al poder recogía, precisamente, los acumulados sociales de más de una década de protagonismo del movimiento social y aprovechaba las fracturas de las clases dominantes. Estas, no obstante, supieron rápidamente penetrar la coalición y doblegarla: la fase 'post-ajuste' que se prometió instaurar en el discurso de campaña de la alianza indígena-militar se vio disuelta por el acercamiento de Gutiérrez a la política norteamericana, a los predicados del FMI, y a los grupos dominantes nacionales. La presencia indígena en el gobierno duró apenas siete meses. Con la ruptura de la alianza, se evidenciaba la inconsistencia de las alternativas anti-sistémicas y se profundizaba la frustración de expectativas políticas. Las movilizaciones sociales de abril 2005 abrieron la puerta al derrocamiento de Lucio Gutiérrez. El tercero en menos de una década. Las movilizaciones dejaban pulverizada la legitimidad del sistema político, y resquebrajados los márgenes de acción de los partidos. El ciclo que ellos habían conducido bajo la óptica de la 'gobernabilidad institucional' y el 'privatismo-neoliberal criollo' llegaba a su ocaso.

5. La nueva agenda pública y el proceso constituyente

La estrategia anti-sistémica y el discurso anti-neoliberal que Correa promocionó desde la campaña electoral lo situaron en las antípodas del poder establecido. El cumplimiento de su programa, una vez electo, le enfrentó, desde el primer día de su gestión, con la banca, los grandes medios de comunicación, los principales partidos de la derecha ecuatoriana y con

la poderosa elite guayaquileña. Esta ha sido percibida por el Presidente como concentradora del poder económico y político del país aún si el partido (PSC) que la representa no ha ocupado el sillón presidencial desde 1988.

La pugna con esta última está ligada tanto al empeño del gobierno de tomar distancia y debilitar a los grupos de poder que tradicionalmente han sabido penetrar las agencias estatales para presionar a los gobiernos de turno en su favor –si algo ha caracterizado al gobierno de Correa es haber conseguido ampliar los márgenes de autonomía del poder político en relación a los poderes económicos- como con el afán de AP de quebrar el dominio político de tales sectores sobre el electorado de la ciudad más poblada del país. Existe, sin embargo, otro problema que ha inquietado aún más a dichas elites y, en general, a los círculos empresariales, financieros, y mediáticos afines a las ideas liberales dominantes en el país en los 90: la orientación del progresivo retorno estatal al primer plano de la agenda pública.

En los seis primeros meses de gobierno, en efecto, Correa puso empeño en cumplir sus principales ofertas de campaña. Rompió con el canon de la política económica ortodoxa de los años 90 y relanzó al Estado al primer plano en la planificación del desarrollo nacional, la regulación de la economía y las finanzas y la redistribución de la riqueza. Incrementó la inversión pública en el campo social (duplicó el bono de la pobreza e incrementó el de la vivienda) y abrió nuevas líneas de crédito para medianos y pequeños productores. Re-alineó la política exterior del país e inscribió al Ecuador en el concierto de países sudamericanos que han tomado distancia con la Casa Blanca y se han acercado al eje Brasilia-Caracas-Buenos Aires. Tal agenda prefiguraba la reconstrucción de un proyecto nacional apuntalado por una potente retórica 'soberanista' y 'anti-elitaria'. Fue en este marco, que se lanzó la iniciativa del Plan Ecuador como una estrategia de cooperación y desarrollo en la frontera norte del país, para contrabalancear al Plan Colombia del presidente Álvaro Uribe. El activismo diplomático de Correa se ha concretado además en el acercamiento de Ecuador a Rusia, Irán y China, y en la implicación del Ecuador en diversos procesos de integración regional mediante iniciativas como la Unión de Naciones Sudamericanas, la ALBA, el Banco del Sur o el Consejo de Defensa Sudamericano.

En medio de una pertinaz confrontación política, de la dinámica inflacionaria y del desastre natural provocado por las inundaciones en el Litoral del país (2008), dicha agenda valió para que Rafael Correa mantenga, durante los dos primeros años de gestión, indicadores de respaldo a su gestión cercanos al 60%. Desde el retorno democrático en 1979, ningún presidente ecuatoriano ha logrado retener durante tanto tiempo de ejercicio gubernamental tan altos niveles de aceptación.

Apoyados en tan sólido respaldo popular, y favorecidos por la inmensa debilidad del sistema de partidos, Rafael Correa, Alianza País (AP) y el Gobierno asestaron diversos golpes a la estructura de poder que sostenía el modelo de Estado y de desarrollo de la década de los noventa. Las decisiones políticas del régimen lo ubican por fuera de la pugna hegemónica entre los dos sectores de las clases dominantes que se han disputado el poder prácticamente desde el retorno de la democracia en 1979: el polo de intereses económicos articulado en torno al PSC, al que se sumaron en su tiempo la Izquierda Democrática y la Democracia Popular, y el polo que inicialmente giró en torno a Abdalá Bucaram y terminó

expresándose con Álvaro Noboa, por medio de un Lucio Gutiérrez que hacía de doble comodín, tanto en la articulación del bloque Noboa como en los nexos entre este y el polo ligado al PSC[9].

La aplastante derrota electoral de los partidos políticos del centro a la derecha durante los comicios convocados para la elección de los representantes a la Asamblea Nacional Constituyente, el deterioro del espacio de representación de las formaciones derechistas surgidas a fines de siglo (PRIAN, PSP) y la afirmación de una nueva fuerza política progresista (AP) acompañada, no sin tensiones, por otras pequeñas fuerzas de izquierda en el seno de la Asamblea, reflejaron la configuración de una nueva correlación de fuerzas en el Ecuador del siglo XXI.

Desde el inicio del proceso constituyente, sin embargo, los grandes medios de comunicación y la derecha partidaria intentaron minar las bases de legitimidad de la Asamblea. Si en un primer momento impugnaron sus plenos poderes y el cierre del Parlamento, posteriormente confrontaron su doble rol: redactar la nueva Constitución y emitir mandatos en coordinación con el Poder Ejecutivo. A lo largo del proceso condenaron, además, el "mayoritarismo" de AP y la excesiva intervención del círculo presidencial en la toma de decisiones del bloque oficialista.

Lo cierto es, no obstante, que mantener la unidad y cohesión del bloque exigió un enorme esfuerzo a la plana mayor de AP. En efecto, aunque un ideario de izquierdas predominó dentro de los asambleístas de gobierno, no se trataba, de ningún modo, de una bancada homogénea. En ella coexistieron, no sin tensiones, una serie de fracciones políticas que van desde la centroderecha, a una variedad de expresiones de izquierda en que destacan ecologistas, vertientes cercanas al movimiento indígena, a ciertos sindicatos, organizaciones de mujeres, al activismo de las ONG, a expresiones de las iglesias progresistas (y no), a militancias tradicionales provenientes de viejos y nuevos partidos de izquierdas y a ciudadanos 'recién llegados' a la política. Una parte del acumulado social de los 90 se expresaba, así, dentro de AP y otra, menor, en las demás fuerzas progresistas que también alcanzaron representación en la Asamblea (MPD, PK, socialismo). Correa aparecía como el articulador de unas tendencias que, en ocasiones anteriores, habían fracasado en más modestos intentos de acercamiento.

Si la reforma tributaria –una de las políticas más coherentes y progresistas de entre las medidas adoptadas por Correa- y la liquidación (al menos legal) de la terciarización y la flexibilidad laboral impulsada en los 90 evidenciaban las fluidas relaciones entre el ejecutivo y la Asamblea, los debates sobre la cuestión ecológica dejaron emerger a la luz pública las múltiples tensiones y la misma heterogeneidad de Alianza País.

Las posiciones ambientalistas fueron abanderadas por Alberto Acosta, presidente de la Convención, fundador de AP y miembro de su comando central (el 'buró político'), asambleísta más votado e intelectual cercano a sindicatos y movimientos sociales desde los

[9] Ver M. Unda, 2008 "Una caracterización del gobierno y la Asamblea Constituyente. Diálogo sobre la coyuntura" (pp.10), Ecuador Debate No. 73, abril.

años 80. Como primer Ministro de Energía del gobierno, delineó la propuesta para la no explotación del campo petrolero ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini), ubicado en el parque nacional Yasuní –una de las reservas de biosfera más importantes del planeta- a cambio de la compensación de la comunidad internacional por el aporte de Ecuador a la conservación del ecosistema. Aunque la propuesta ha tenido eco a nivel internacional, y continúa siendo negociada con algunos países europeos, no contó inicialmente con el pleno respaldo de Correa.

Las tensiones entre "extractivistas" y "ambientalistas" comenzaron, entonces, dentro del gabinete ministerial y se intensificaron en el curso de las deliberaciones constituyentes. Acosta y los asambleístas "leales" a Correa mantuvieron intensos duelos en relación a los límites ambientales de la explotación minera, a la declaración del agua como derecho humano fundamental y a la necesidad de consultar (tesis de Correa) u obtener el consentimiento previo (de Acosta) de las poblaciones y comunidades indígenas, cuando el Estado disponga la explotación de recursos naturales en los territorios que ellas ocupan. La influencia moral e intelectual del presidente de la Asamblea, que contaba siempre con el respaldo del reducido bloque de Pachakutik, permitió que las tesis ecologistas salgan bien libradas en los dos primeros debates. Dio paso, además, a la sui géneris figura de otorgar derechos a la naturaleza. En relación a las explotaciones, sin embargo, se impuso la línea realista del amplio bloque de constituyentes adeptos a Correa. La dureza del debate dejó muy malogradas las relaciones entre las dos figuras más visibles de la Revolución Ciudadana y, más aún, entre el poder ejecutivo y el movimiento indígena. No sería su último desencuentro.

Las primeras deserciones del bloque oficialista vendrían, sin embargo, por otras razones. Algunas facciones de AP, aún a pesar de las reservas religiosas de Correa –quién no ha escondido el hecho de ser un católico practicante-, propendían hacia una modernización de la Carta Magna en materia de derechos sexuales y reproductivos. El peso del lobby ultra-conservador en la opinión pública aupó la renuncia de dos asambleístas que consideraban que tales propósitos eran contrarios a la moral católica de los ecuatorianos. Múltiples organizaciones de mujeres, por su parte, condenaron la timidez con que el oficialismo encaró el tema.

El caso es, sin embargo, que la influencia de dichas organizaciones en el debate público ha sido largamente superada, durante los últimos cinco años, por el activismo de múltiples organizaciones civiles en defensa de los más retardatarios valores y políticas sobre la vida y la familia. Así, los denominados "grupos pro-vida", avanzaron durante el año 2006 una agresiva campaña para prohibir la venta de una marca de la Pastilla de Anticoncepción de Emergencia y para reformar la ley orgánica de salud a fin de eliminar la educación para la sexualidad y toda referencia a los derechos sexuales y reproductivos. Más tarde procuraron penalizar el aborto terapéutico. En los días de la Constituyente organizaron diversas marchas a lo largo del país, y en los mismos predios de la Convención, para oponerse frontalmente a cualquier avance -se oponen incluso al uso de nociones como 'identidad de

género' u 'orientación sexual'- en materia de libertades sexuales, reproductivas y relaciones sociales[10].

En medio del acoso mediático y eclesiástico, escándalos políticos -denuncia de intentos de comprar asambleístas y de espionaje militar no autorizado- y la intensificación de fricciones internas, la Asamblea perdía aceleradamente prestigio social. Acosta no había conseguido dotar de un espacio, una identidad y una densidad política propia al proceso constituyente. Su voz y las de otros promisorios liderazgos en el seno de la Asamblea, pasaban prácticamente desapercibidas frente a la del estruendoso líder. La imagen de éste continuaba intacta e incluso se afirmó luego de su enérgico rechazo a los bombardeos colombianos en Angostura el 1 de marzo, donde cayó asesinado Raúl Reyes, el número dos de las FARC.

La presencia de un "coordinador de contenidos" –designado desde el gobierno- entre el Ejecutivo y la Asamblea, y la institucionalización de frecuentes reuniones del bloque de asambleístas de AP junto con el buró político del movimiento y el mismísimo presidente Correa –lo que se conoció como el "mega-bloque"- evidenciaban los problemas de conducción política del proceso y la voluntad del círculo presidencial de tener bajo su lupa a la Asamblea.

Al mega-bloque fueron invitados posteriormente los asambleístas de las pequeñas bancadas, afines a AP, provenientes de Pachakutik, el Movimiento Popular Democrático, e Izquierda Democrática. La mayoría llegaba así a 90 constituyentes. En la práctica, tales reuniones funcionaron como instancias de debate y decisión partidaria. En su seno se coordinaban las resoluciones que luego serían votadas en conjunto. Los disensos podían aparecer en esta instancia pero, una vez que se llegaban a acuerdos, no debían expresarse en las sesiones plenarias. La unidad del bloque se preservaba con sigilo, al costo de evitar la amplificación de ciertos debates en el pleno de la Asamblea. Tal dinámica deliberativa no ha sido usual en la historia de los modernos partidos políticos ecuatorianos. La constante presencia de una diversidad de ciudadanos, instituciones y organizaciones sociales en su seno mantenía el carácter participativo del proceso.

Aunque los medios de comunicación han insistido en que se ha redactado una Carta Magna a la medida de Correa, lo cierto es que en el seno del mega-bloque las controversias y agrios debates entre el presidente y algunos asambleístas no fueron pocas. Correa debió recular en varias tesis. La declaración del Estado ecuatoriano como plurinacional –demanda esgrimida por el movimiento indígena desde fines de los 80– evidenció el peso de las posturas 'movimientistas' y pro-indígenas dentro de AP no bien comprendidas por Correa y sus allegados, ni por los bloques opositores. De igual modo sucedió con cuestiones relativas a los derechos colectivos y a las demandas corporativas de los sindicatos de empleados públicos; o a la gratuidad de la educación pública universitaria

[10] Ver Paula Castello Starkoff, 2008, "Despenalización del aborto y nuevo proyecto constitucional: un tema polémico", pp. 19-23, en ICONOS No. 32, septiembre, FLACSO-Quito.

Los nexos del ala izquierda del bloque con las organizaciones sociales y con ciertos segmentos del ejecutivo dejaron siempre abierta la discusión sobre formulaciones promisorias. Ni la propensión decisionista de las interferencias presidenciales, ni la beligerancia de ciertas relaciones desmontaron, pues, el espacio de interlocución política que había forjado la ANC. Honneth (1996) ha argumentado que los espacios públicos pueden estructurarse a través de conflictos en que actores con identidades e intereses diversos, e incluso contrapuestos, tienden a reconocerse políticamente. La convención entreveró en dicha lógica al nuevo bloque gobernante y a una gran variedad de organizaciones populares. La ampliación de los derechos, el incremento de los sujetos sociales que los portan[11] y de los ámbitos que atingen[12], recogían la productividad de su presencia y de las disputas allí encaminadas. El proceso constituyente supuso, entonces, el afianzamiento de las expectativas sociales de cambio y la expansión del espacio de reconocimiento político.

Así, aún a pesar del remezón que causó en la izquierda y en los movimientos sociales el pedido de AP para que Acosta deje la dirección de la ANC a un mes de su terminación[13], diversas de organizaciones sociales, el MIE y Pachakutik optaron por respaldar el proyecto constitucional. Posicionaron, sin embargo, la tesis del "sí crítico". Remarcaban, de este modo, sus distancias con el poder ejecutivo pero reconocían los avances del proyecto constitucional. El MPD, el socialismo, y las organizaciones clasistas más tradicionales sostuvieron, llanamente, la opción del SI. Una reducida fracción de sindicatos públicos, movimientos radicales más o menos convencionales, y los disminuidos partidos centristas postularon la tesis de la abstención, del voto nulo, o incluso del NO. Su posición reflejaba, sobre todo, la necesidad de una nítida diferenciación con respecto a Correa y un rechazo a las irregularidades procedimentales en la aprobación de la Carta Magna.

La marcha de Acosta, la escasa autonomía de la convención y la distancia de Correa con los movimientos sociales, incrementaron las voces que, desde la izquierda, tomaron distancias con el régimen. El optimismo de militantes y adherentes de la Revolución Ciudadana estaba en su punto más bajo cuando el gobierno anunció, el 8 de julio 2008, la incautación de casi 200 empresas del grupo Isaías-uno de los grupos financieros guayaquileños más poderosos del país- a fin de recuperar una parte de los más de 660 millones de dólares que los ahorristas y el Estado habían perdido, a favor de tales grupos, durante la crisis bancaria de 1999, que terminó con la dolarización de la economía. La impronta anti-oligárquica del proceso se recomponía, los movimientos sociales anunciaban su respaldo a la medida y las

[11] Se hace referencia, entre otros, a los ecuatorianos residentes en el exterior, a las personas con discapacidad, montubios (campesinos de la región costa), extranjeros. En una formulación posliberal, además, la Carta Magna reconoce a individuos y colectivos (pueblos, nacionalidades, organizaciones) como sujetos de participación.

[12] Los denominados "derechos del buen vivir" incluyen dimensiones ambientales, tecnológicas, comunicativas, culturales.

[13] La crisis del oficialismo provenía de las diferentes posiciones en relación al fin de la Asamblea. Acosta no quería sacrificar la calidad del debate en nombre de los tiempos políticos. Planteó extender las deliberaciones. Las encuestas evidenciaban, sin embargo, un acelerado desgaste del proceso. Correa y el comando central de AP leyeron la propuesta como un suicidio político.

encuestas revelaban una recuperación en la imagen del Presidente y de la Asamblea. El Ministro de Economía, no obstante, prefirió dimitir antes que sostener la medida gubernamental: en la encumbrada ala derecha del régimen no cayó bien tal medida.

En medio de este conflictivo escenario emergió un proyecto constitucional presentado al país, no con todo el rigor democrático, la última semana de julio 2008. Descontando el sostenimiento del presidencialismo como régimen político, algo a lo que se opusieron las fuerzas de izquierda en la Asamblea de 1998, la propuesta de Carta Magna avanza en cuestiones ligadas a la reconstitución y racionalización estatal, a las regulaciones ambientales del desarrollo y a la consagración de derechos a la naturaleza, al reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, a la amplia promoción de la participación social, a la consolidación de los derechos ciudadanos, a la construcción de un Estado constitucional, a la prefiguración de un modelo de desarrollo distante del canon ortodoxo, a la primacía del poder civil sobre el actor militar, a la profundización del sufragio universal –que amplía la comunidad política al facultar el derecho al voto de jóvenes mayores de 16 años, ecuatorianos en el exterior, extranjeros, reos sin sentencia, policías y militares- entre otros elementos. La Carta Magna –aprobada el 28 de septiembre del 2008 por el 63 por ciento de los votos del Referéndum constitucional- innova y contiene, entonces, el conjunto de demandas e intereses que emergieron desde la resistencia popular al neoliberalismo, y desde otras agendas de modernización democrática y transformación social del Estado, la política y la economía, represadas en los años 90.

El 'campo del NO' estuvo, por su parte, compuesto por los debilitados partidos de la derecha ecuatoriana (PSC, UDC –ex DP-, PRIAN, PSP), las cámaras empresariales, las elites bancarias y financieras, ciertas ONG de corte liberal-democrático y, sobre todo, el intenso activismo político de los grandes medios de comunicación y de la cúpula de la Iglesia Católica. Sus críticas al proyecto constitucional versaban, entre otros, sobre el excesivo poder otorgado al Presidente, el agresivo retorno de la regulación estatal sobre el mercado, la complejidad del nuevo entramado institucional, las falencias procedimentales en el cierre del proceso y, desde perspectivas ultra-conservadoras, la misma ampliación de los derechos sexuales y reproductivos.

Correa calificó al referéndum del 28 de septiembre como la 'madre de todas las batallas'. Aunque la promoción de su figura se colocó, una vez más, en el centro de la estrategia electoral de AP, el debate público sobre los contenidos del texto constitucional no ha tenido antecedentes en el país. Más de dos millones de ejemplares circularon en diversos puntos de la sociedad. Los resultados favorecieron, finalmente, a la opción del SI con más del 63 por ciento de respaldo popular.

6. De la polarización simple a la polarización compleja

El 26 de abril del 2009 se realizaron elecciones generales en el marco de las nuevas reglas del juego político delineadas por la Constitución aprobada en septiembre 2008. Dichas elecciones pusieron de manifiesto una serie de significativos cambios en la dinámica del sistema de partidos ecuatoriano y provocaron una cierta alteración en la correlación de fuerzas políticas que, desde 2007, había sido ampliamente favorable al movimiento conducido por el Presidente Rafael Correa. En la lectura de ambas cuestiones se advierten elementos de análisis que permiten advertir sobre una cierta reconfiguración del campo de

la conflictividad socio-política así como sobre la emergencia de nueva dinámica de polarización política.

6.1 Variaciones en el sistema de partidos

Uno de las principales novedades de las elecciones de abril 2009 ha sido que, por primera vez desde la restauración democrática, un presidente es elegido en la primera vuelta electoral y con más de 20 puntos de diferencia con respecto al segundo candidato. Se trata, además, de una re-elección presidencial *inmediata* que revierte la tendencia, visible a lo largo del ciclo 1979-2006, al retiro sistemático del respaldo electoral al partido gobernante. Hasta antes de la re-elección de Correa ningún partido político había podido volver a ocupar el sillón presidencial luego de ejercer el poder. De las filas de *ocho* formaciones políticas distintas han surgido los *ocho* presidentes democráticamente electos en el reciente ciclo de regímenes civiles. La pérdida de confianza en los círculos gobernantes ha sido nítidamente sancionada en las urnas. La desilusión política enmarca la decisión electoral. El caso ecuatoriano no tiene parangón en la región Andina.

Por otro lado se destaca la reducción de la fragmentación y del número efectivo de partidos para las elecciones presidenciales y en el nivel legislativo. En dicha arena se observa el predominio de una fuerza, Alianza País (AP), lo que abriría el escenario para la configuración de un *gobierno de mayoría*, otro de los rasgos inéditos en el presente ciclo democrático: AP tiene 59 legisladores, de 124 posibles, en el seno de la Asamblea Nacional. Aunque no es una cifra que otorgue al gobierno la mayoría absoluta, si aparecía como una base adecuada para construir una alianza parlamentaria consistente. La generación de un sistema mayoritario, sostenido en la fuerza electoral de AP, rompe con la tendencia al multipartidismo extremo polarizado que ha caracterizado al sistema de partidos en el Ecuador. Dicha ruptura ha supuesto que los nuevos partidos que parecían consolidarse a inicios de siglo (PRIAN, PSP) sean hoy considerados como formaciones tradicionales. A su vez, los partidos que inauguraron la democracia están prácticamente (ID) en extinción (UDC -ex DP) o muy debilitados (PSC, PRE). AP aparece como la única fuerza emergente con representatividad nacional.

Precisamente, otro de los rasgos novedosos en la reconfiguración del sistema de partidos remite a una cierta tendencia al anclaje nacional de los apoyos hacia dos de las fuerzas mayoritarias: PSP y, sobre todo, AP. Históricamente la dinámica partidaria ha estado sometida a clivajes regionales que implicaban que cada formación política era fuerte solo en una región (o incluso, provincia). Tal como ha sido demostrado por diversos autores, ello incentivaba a los partidos a presentar candidaturas en un número reducido de circunscripciones. Con las elecciones del 2009 se revertiría el escenario en que los partidos actuaban únicamente como "organizaciones regionales"[14]. AP presenta, masivamente, candidaturas a dignidades nacionales y locales, y lo hace a lo largo del territorio nacional. A la vez, la presencia electoral de Correa en el territorio nacional es la más homogénea del último ciclo democrático. El re-electo Presidente ganó en 20 circunscripciones electorales

[14] Ver Flavia Freidenberg, 2008, "El sueño frustrado de la gobernabilidad. Instituciones, actores y política informal en el Ecuador", Barcelona: CIDOB.

mientras que L. Gutiérrez (PSP) lo hizo en 7.[15] Aunque en mucha menor proporción, los votos del PSP también tienen cierto asidero nacional.[16]

A nivel de las candidaturas locales, por último, se observan tendencias bastante similares. a) AP se afianza luego de que, en 2006, no presentara candidatos a las autoridades seccionales, en 2009 alcanza -con ciertas alianzas- el 40% de las prefecturas, el 30% de los municipios y el 45% de las juntas parroquiales[17]; b) el deterioro de las fuerzas políticas tradicionales: a nivel de las prefecturas, por ejemplo, el PSC, el PRIAN, el PRE, y la UDC, no tienen por sí solo ni una sola autoridad electa. La ID ganó en una provincia; c) el repunte de Pachakutik (PK): a nivel de las autoridades municipales dicho movimiento se colocaría como la segunda fuerza política con 35 alcaldías (AP tiene 71 – sin alianzas)

Tabla 4.
Composición política de los Municipios (2009)

Mov./Partido	No. Alcaldías
MPAIS	71
Mov. Provinciales (sin alianzas)	38
PK	35
PSP	30
Diferentes Partidos / Movimientos locales (con y sin alianzas)	21
MMIN	20
Indefinidas	6
Total	221

Fuente: Consejo Nacional Electoral. Elaboración propia.

La consistente implantación electoral de la Revolución Ciudadana a nivel nacional y local habría significado, sin embargo, la ampliación del margen de heterogeneidad política e ideológica del movimiento oficialista. En el nivel provincial y local, sobre todo, las adhesiones y alianzas políticas han implicado la articulación de figuras políticas recicladas, provenientes de los viejos partidos o de nuevas figuras sin claras credenciales ideológicas. ¿Se convierte AP en un partido atrapa-todo? Es probable. Ello sucedió a pesar, incluso, de que en enero del 2009 AP organizara unas inéditas elecciones primarias a fin de determinar sus candidaturas al parlamento (provinciales), a las prefecturas, a los municipios y a los concejos locales. La confusión y las irregularidades del proceso fueron resueltas con extremo pragmatismo electoral.

[15] El Ecuador tiene 24 provincias. Cada una de ellas funciona como una circunscripción electoral. A ellas hay que agregar las tres circunscripciones que corresponden a los ecuatorianos en el exterior: América del Sur, Estados Unidos-Canadá, y Europa. En total suman 27.
[16] Ver Adrián López, 2009, "Elecciones 2009: ¿Cómo se votó el 26 de abril?", Quito: Senplades, s/e.
[17] La izquierda ganó ampliamente, de hecho, en esta elección y la derecha fue marginada. Los partidos y movimientos de izquierda (PAÍS, MUPP-NP, MPD, ID, RED, entre otros) suman 60,88% del total de los miembros de las Juntas, y 71,48% de las Presidencias de las Juntas. La derecha (PSC, PRIAN, PSP, UNO) se quedan con 14,95% y 8,29%, respectivamente. Agradezco por esta observación y por los cálculos a Adrián López.

A tropiezos, en cualquier caso, de modo conflictivo, y con muchas diferencias según los territorios y provincias, la construcción del movimiento político (AP) parece avanzar en medio de una atmósfera anti-partidaria –que continúa intacta y que parece revertirse incluso contra AP- apenas matizada por el prestigio del liderazgo presidencial.
La influyente voz del Presidente tampoco ha conseguido activar sostenidas dinámicas de movilización política y de organización colectiva en torno del proceso de cambio. Por fuera de los actos de masas y las demostraciones de fuerza promovidas cada tanto por las cúpulas del movimiento, la sociedad acompaña a la Revolución Ciudadana desde lejos y a través de la pantalla chica. Detrás de las conquistas electorales de AP hay, en efecto, menos articulación hegemónica y dinamismo organizativo que buena imagen presidencial, cierta coherencia gubernativa y pertinencia de la política social. Algunos de sus más altos cuadros lo saben. Preparan la primera convención del movimiento, recién, para el segundo semestre del 2010.

6.2 Desaceleración política

Con las elecciones del 2009 se cerró un primer momento de la Revolución Ciudadana. El recambio de elites políticas, la transformación de las bases constitucionales del país, el giro de la agenda de políticas públicas (hacia algo que, diversos autores, han calificado como post-neoliberalismo) y la re-elección presidencial, se sucedieron a un ritmo a todas luces vertiginoso: veinte y ocho meses de gestión gubernativa. Solo a modo de contrapunto, en el proceso de cambio político conducido por el Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia, el cierre de similar ciclo político (elección de fuerza anti-sistémica, cambio constitucional, giro en agenda pública, y re-elección presidencial) tomó a la fuerza gobernante todo el primer período de gobierno de Evo Morales (2005-2009).

Sin embargo, a diferencia del proceso boliviano, donde luego de las elecciones generales de diciembre 2009 Evo Morales y el MAS quedaron mejor emplazados en términos de fuerza y hegemonía que cuando empezaron su gobierno –derrotaron largamente a la derecha autonomista de la denominada "media luna"-, en el Ecuador la plataforma política de la Revolución Ciudadana no parece haberse expandido mucho más allá de los circuitos constituidos desde el interior de la propia fuerza gobernante.

A pesar de las apariencias, en efecto, luego del primer período de gobierno, la Revolución Ciudadana no ha logrado formar un bloque de articulaciones sociales y políticas que acompañen y presionen por la concreción efectiva de la agenda de cambios delineadas por AP y ratificadas en el texto constitucional. El conjunto de adhesiones al proceso de cambio político orbita más en torno al respaldo -casi siempre inorgánico- a la figura presidencial, que a la estructuración de un campo de alianzas con organizaciones, movimientos y partidos relativamente afines en términos programáticos e ideológicos.

Dichas inconsistencias pesaron en el balance electoral que algunos calificaron como una amplia victoria del movimiento gobernante. A pesar de la re-elección de Correa en primera vuelta y de la consolidación de AP como la más importante fuerza política a nivel nacional y local, el oficialismo no alcanzó la mayoría parlamentaria absoluta, sus candidatos fueron

derrotados para la alcaldía de Guayaquil y la Prefectura de Guayas[18] -las grandes circunscripciones electorales del país-, y estuvo lejos del 63% con el que se aprobó la Carta Magna en septiembre 2008. El 52% de respaldo a la re-elección evidenciaría que la agenda de cambio no es visualizada como bandera de un solo movimiento político. El MPD y Pachakutik recuperaron, en el marco de un progresivo alejamiento del gobierno, sus cotas de representación parlamentaria y local.

Los resultados electorales reflejarían, en buena parte, las fisuras y tensiones entre Correa y los sectores situados, en formas convencionales o innovadoras, a la izquierda del gobierno. Ello des-configuró, en el seno del nuevo poder legislativo, las alianzas políticas tejidas durante la Asamblea Constituyente. Dicha des-configuración incrementó, a la vez, la incertidumbre estratégica entre las principales fuerzas políticas: la elección de Fernando Cordero (AP) como Presidente de la Asamblea se estructuró con una frágil coalición que aún no ha podido ser plenamente consolidada y, menos aún, ampliada. La debilidad articulatoria abrió el contexto de oportunidad para la activación de un nuevo ciclo de conflictividad social.

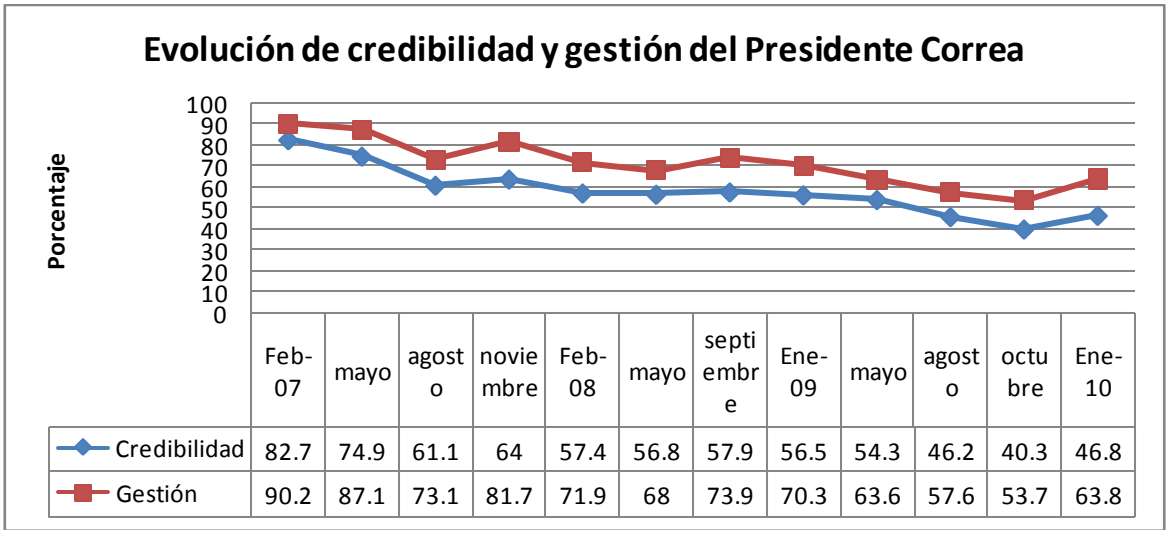
Dicha conflictividad ha estado estrechamente ligada a la discusión de diversas leyes que -por mandato constitucional- debían aprobarse luego de un año de ratificada la Carta Magna. Se trata de leyes prioritarias de cara al proceso de cambio político que vive el país: ley de soberanía alimentaria, ley de aguas, ley de comunicación, ley de servicio público, ley de educación superior, entre otras. Las dificultades de articulación al interior del bloque oficialista y las diversas líneas de oposición a los proyectos de ley presentados por AP han retrasado su procesamiento. Además de los diferendos programáticos, la escasa apertura al diálogo del entorno presidencial y el no *reconocimiento político* de la legitimidad de sus adversarios han pesado en la configuración de tal escenario.

En medio de la complejidad de las tareas legislativas el gobierno debió enfrentar un escándalo por las acusaciones de corrupción en relación a contratos públicos establecidos entre diversos ministerios y el hermano mayor del presidente y, por otro lado, la contundente ofensiva de Colombia, de la derecha parlamentaria, de la prensa nacional e internacional, y de diversos ex agentes policiales y militares sobre presuntas implicaciones de funcionarios gubernamentales con las FARC. Es así que, luego de dos años de gozar de una inmensa popularidad, los índices de confianza en el presidente Correa observaron un decrecimiento sostenido -cuya importancia varía según las encuestas-, mucho más notorio en Guayaquil que en Quito.

Los efectos de la crisis económica global en el desempleo y la recurrencia de los problemas de inseguridad y violencia pública también habrían pesado en la caída de la credibilidad del presidente. No obstante, y aunque también desciende, la valoración de la gestión de su gobierno sigue siendo considerable. Ello obliga a tomar con cautela la pertinencia de los análisis que explican -a través del uso de la noción de populismo- los procesos políticos en

[18] Luego de obtener 9,82% de la votación en las elecciones para la Asamblea Constituyente (2007), el PSC alcanza en 2009 –bajo *el disfraz* de un movimiento ciudadano (Madera de Guerrero)- el 35,4% de apoyo electoral provincial. AP decrece a su vez casi 25 puntos: del 59,58% al 34,28%. En Guayas existe entonces un virtual empate entre ambas fuerzas políticas a nivel parlamentario.

los países andinos como puro efecto del prestigio, las capacidades comunicativas y el carisma de líderes con grandes dotes discursivos. Al contrario, desde su primer año de gestión, la Revolución Ciudadana ha sido mejor evaluada por su acción gubernativa que por la confianza ciudadana en las palabras de su líder[19].



	Feb-07	mayo	agosto	noviembre	Feb-08	mayo	septiembre	Ene-09	mayo	agosto	octubre	Ene-10
Credibilidad	82.7	74.9	61.1	64	57.4	56.8	57.9	56.5	54.3	46.2	40.3	46.8
Gestión	90.2	87.1	73.1	81.7	71.9	68	73.9	70.3	63.6	57.6	53.7	63.8

Fuente: Perfiles de Opinión.
Elaboración: Propia

Aunque para el primer mes del 2010 el gobierno y Correa recuperan puntos a favor en la opinión pública –queda abierto el interrogante sobre si asistiríamos a un momento de reversión de tendencias-, tanto los resultados electorales de las elecciones generales de abril 2009 como las encuestas de opinión revelan que el tercer año de la Revolución Ciudadana ha implicado para Rafael Correa y el movimiento gobernante una desaceleración en sus robustas cotas de apoyo político. Dicha tendencia es más nítida en Guayaquil, ciudad de nacimiento del mandatario y donde, paradójicamente, AP desplegó mayores esfuerzos organizativos y electorales para desplazar a Jaime Nebot y a las elites locales de la plena hegemonía política de la ciudad.

Si bien hay señales de que dicho desplazamiento ha ocurrido aunque sea de modo parcial -Nebot ya no controla totalmente el Concejo Municipal (AP tiene 5 concejales) y diversos sectores populares han comenzado a movilizarse en su contra-, también es cierto que gran parte de lo que AP avanzó en el marco del proceso constituyente ha sido recuperado por las fuerzas afines al Alcalde. En la recuperación política de las elites locales de la ciudad más poblada del país habría pesado la reactivación de una retórica que apela a la identidad guayaquileña como forma de confrontar los avances del Estado central y de sostener la tesis de la autonomía política para la ciudad.

[19] La serie sobre "credibilidad" recoge los respuestas positivas (SI) de los encuestados (ante la pregunta sobre si le creen o no al Presidente), mientras que la calificación de la gestión agrupa las respuestas favorables (Buena y Muy Buena).

El regionalismo discursivo ha sido permanentemente utilizado por las elites locales como recurso simbólico y político a la hora de encarar batallas contra lo que ellos observan como los excesos del centralismo gubernamental. Aunque gran parte del gabinete ministerial y de los más altos cuadros políticos del gobierno de la Revolución Ciudadana provienen de la ciudad de Guayaquil, y aunque la nueva Constitución reconozca la figura de los distritos metropolitanos autónomos (Quito y Guayaquil), el acento que Correa ha colocado en el contundente retorno del Estado a la planificación del desarrollo, a la inversión pública, a la regulación económica y a la redistribución de la riqueza social -entre otros elementos- ha permitido a los circuitos de poder guayaquileños posicionar fácilmente su puja política con el gobierno en los clásicos términos de la *identidad local agraviada por la burocracia central*. Una vez más, la cuestión regional emergería como una de las líneas de conflicto y polarización política en el Ecuador.

6.3 Embates en la izquierda y nueva polarización

Un estudio del Proyecto de *Elites Parlamentarias en América Latina*, del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, ha demostrado que las percepciones de los políticos con respecto al lugar que ocupa el Estado en la regulación de las actividades económicas aparecen como un eje de diferenciación, y eventual polarización, entre las fuerzas políticas latinoamericanas. En el caso ecuatoriano la tendencia al respecto es aún más clara desde la emergencia de AP en las arenas parlamentarias.

Así, al ser interrogados respecto a su posición en una escala donde 1 es igual a 'mayor participación del Estado en la economía' y 5 es igual a 'dejar que el mercado se autoregule', se observa que los asambleístas (constituyentes) de AP se manifestaron mucho más a favor (1,90) de la intervención del Estado en la economía que el resto de fuerzas políticas - PRIAN (4,50), PSC (3,50), y PSP (2,93)- predominantes en el seno del poder legislativo[20].

Del mencionado estudio se colige que la polarización ideológica en el nuevo escenario político ecuatoriano ha colocado a AP en uno de los extremos, el izquierdo, del arco de auto-posicionamiento ideológico en el que la mayoría de miembros de las otras fuerzas se ubicaron del centro hacia la derecha. Los datos muestran, en efecto, que los asambleístas de AP se auto-ubican en una media de 2,7 –la escala ideológica empleada señala que 1 es izquierda y 10 derecha- mientras que los del PRIAN, en el otro extremo, se posicionan en 5,8, los del PSC en 5,7 y aquellos del PSP en 4,7 (ibid.). Se observa que los partidos de origen y de base electoral asentada en la región litoral del país (PRIAN, PSC) –y en concreto en la ciudad de Guayaquil- tienden a colocarse en el punto más extremo de la derecha en el arco de auto-representación ideológica de las fuerzas políticas nacionales. Ello explicaría, en parte, la reactivación de un regionalismo político en los discursos de estos actores contra el retorno estatal movilizado por el gobierno. Los datos muestran además dos cuestiones de interés para el análisis de las vigentes líneas de polarización política en el Ecuador: a) los miembros de AP se auto-posicionaron más hacia la izquierda en relación a lo que, durante el ciclo 1996-2006, lo hicieron los miembros de Pachakutik; b) si se compara el ciclo 1996-2006 con el inaugurado en 2007, en el marco de la vigencia de

[20] Ver F. Freidenberg, 2008, "¿Renovación o continuismo? Actitudes, valores y trayectorias de la clase política ecuatoriana", Salamanca: Instituto Interuniversitario de Iberoamérica -Universidad de Salamanca.

la Asamblea Constituyente, se observa una importante tendencia al corrimiento al centro de las posiciones tradicionalmente ubicadas hacia la derecha: el PSC pasa de de 6,83 en los años 2003-2006 a 5,7 en el ciclo 2007-2008.

Ambos elementos permiten afirmar que a pesar de una cierta radicalización hacia la izquierda –por la vía de la emergencia de Correa y AP- en el sistema de partidos, las distancias entre los polos ubicados en los extremos del arco ideológico ecuatoriano han tendido más bien a reducirse: si la distancia entre el PSC y Pachakutik en los años 2003-2006 llegó a 3,83, aquella que separa a AP del PRIAN, durante 2007-2008, es de 3,1. Aunque la progresiva deslegitimación social de la ortodoxia neoliberal de los años 90 habría influido en la (aparente) moderación de ciertos segmentos de la derecha ecuatoriana, podría plantearse además la hipótesis de que el predominio y la preponderancia política en el seno de la esfera parlamentaria de la fuerza 'radicalizadora' (AP) habría empujado al conjunto de los actores políticos a posiciones menos distantes de las suyas. ¿No es ello acaso un síntoma del lento trabajo de recomposición hegemónica -en términos de cambios en el sustrato intelectual y moral que acompaña a todo ejercicio de poder- que se ha desenvuelto en el marco del recambio de la clase política en el Ecuador del siglo XXI?

Observar la silenciosa eficacia de las ideas hegemónicas no supone afirmar que el país asista a un proceso de despolarización ideológica en el que la diversidad de valores e ideas políticas hayan dejado de ser objeto de controversias y querellas públicas. Nada más lejos de aquello. Aunque debilitadas, las fuerzas de la derecha política -con largo eco mediático- mantienen una nítida línea de oposición programática y confrontación política con el gobierno de la Revolución Ciudadana. Las diferencias entre ambos campos aparecen como irreductibles.

El *bando 'neo-conservador'* insiste, pues, en contestar las bondades del proyecto político de Rafael Correa por la vía, sobre todo, de su rechazo frontal al retorno del Estado como eje coordinador de las relaciones económicas y sociales. Su discurso se ampara fundamentalmente en la enfática defensa de la libertad negativa -la no interferencia del Estado en el mercado y en el ámbito privado de las relaciones sociales-, en su apuesta por la auto-regulación de los sistemas sociales y en demandas de seguridad, más que para los ciudadanos, para las inversiones extranjeras. El rechazo del centralismo, del decisionismo presidencial, y de la falta de fiscalización al poder ejecutivo completan esta potente retórica. Desde este bloque también se han escuchado álgidas críticas a las innovaciones participativas que estipula la Constitución -acusada, por ello, de anti-liberal- y al campo de alianzas geo-políticas abiertas a nivel internacional por el gobierno.

El debate en torno al proyecto de ley de comunicación agudizó las tensiones entre la Revolución Ciudadana y, sobre todo, los actores políticos del campo neo-conservador. La tesis fundamental de estos últimos es que dicho proyecto atenta contra la libertad de expresión, que en el ámbito comunicativo "la mejor ley es la que no existe", y que los medios son -mediante el mercado- capaces de regularse a sí mismos. En el último trimestre del 2009 llegaron incluso a demandar el archivo definitivo del proyecto de ley.

La confrontación permanente entre los grandes medios y el gobierno, y la escasa tolerancia que Correa ha demostrado hacia aquellos -a quienes observa solo como representantes de

los grandes grupos de poder- ha radicalizado las posturas contrarias a cualquier regulación del campo comunicacional. El presidente ha insistido a su bloque, en cambio, sobre la necesidad de sostener una ley que puede tener como efecto la reconfiguración la matriz de poder social en el país. Las diferencias dentro de AP volvieron entonces a expresarse: no todos los asambleístas comparten la exasperación presidencial con los medios. Como desde los días de Montecristi, sin embargo, la deliberación interna ha conseguido sostener la unidad de una bancada que parece estar siempre a punto de eclosionar.

No parece casual, entonces, que en el contexto de la anodina vida organizativa de viejos y nuevos movimientos y partidos políticos y de la incapacidad de la derecha y de la oposición parlamentaria para delinear un proyecto político creíble, sea un periodista de televisión -Carlos Vera- quien aparezca hoy entre los principales contradictores de Correa. Ha sido él quien ha lanzado la tesis de preparar un referéndum revocatorio del Presidente Correa para agosto del 2010. Aunque una parte de la derecha política ve con escepticismo esta idea, se trata de un discurso que -en la línea de la oposición venezolana anterior al golpe de Estado del 2002[21]- plantea una arriesgada estrategia de abierta polarización, confrontación y desconocimiento pleno de la legitimidad (y de la fuerza) del gobierno.

Por izquierda, antes y después de las elecciones generales de 2009 la tensión y beligerancia entre Correa y, sobre todo, las organizaciones indígenas se mantuvo constante. Los primeros embates se dieron, en enero 2009, luego de que sectores indígenas y ambientalistas anunciaran su resistencia a la minería y acusaran al gobierno de neoliberal. Correa respondió violentamente. Habló de los peligros que representa el "izquierdismo, ecologismo e indigenismo infantil" para el proyecto nacional de cambio político. En adelante, la estrategia gubernamental pareció reorientar la polarización hacia la dirigencia indígena.

Con la instalación del nuevo parlamento, a su vez, la "política de puertas abiertas" de la constituyente se revertió. La impaciencia revolucionaria de Correa y AP en Montecristi obligó a la función legislativa, electa en abril 2009, a aprobar más de once leyes en un año. Se trataba de un claro desincentivo institucional para la deliberación pública y para la búsqueda de acuerdos sustantivos entre AP y las minorías cercanas. Por lo demás, contener los problemas de heterogeneidad, diferenciación, e incluso antagonismo al interior de la renovada bancada oficialista aparecía, más bien, como la prioridad de sus coordinadores. En el nuevo bloque mayoritario se cuentan menos legisladores cercanos al campo de las organizaciones populares. La ruptura de la coalición política –desapareció el "mega-bloque"- tejida en Montecristi redujo, además, las opciones para que estas últimas puedan incidir en el debate parlamentario. Tal descomposición articulatoria, que refleja e incuba recurrentes episodios de volatilidad programática, estimuló la reactivación del conflicto.

Así, además de los sectores que confrontaron al gobierno 'por derecha' y desde el arranque mismo del gobierno, desde 2009 se observa una serie de protestas provenientes de sectores organizados más o menos cercanos al arco progresista. En la configuración de tal escenario han pesado no solo diferendos programáticos en la orientación de las leyes, sino la baja

21 Ver Margarita López Maya, 2002, "El golpe del Estado del 11 de abril y sus causas", en Sociedad y Economía, No. 3, Cali.

disponibilidad del oficialismo para entablar procesos de interlocución política incluso con aquellos sectores que le han sido globalmente afines. Las diversas líneas de oposición social a los proyectos de ley y las dificultades de coordinación al interior del bloque de AP han retrasado su procesamiento[22].

El punto más alto del conflicto, luego de tres años del gobierno de AP, llegó a fines del 2009 cuando convergieron las movilizaciones indígenas en rechazo a ciertos artículos del proyecto de Ley de Aguas, las protestas del gremio docente en contra de la evaluación académica de los maestros, y aquella de profesores y estudiantes universitarios en oposición al proyecto de ley que regularía la educación superior. La intensa cobertura mediática de las protestas no conseguía ocultar, sin embargo, la atomización de la acción colectiva y la des-implicación de una ciudadanía que, del todo distante de la política, aún no retira la confianza al Presidente. Aunque tales sectores han mantenido específicas críticas al gobierno y a los proyectos de ley presentados por AP, comparten entre sí un malestar similar por la subestimación política y la ausencia de interlocución con el oficialismo. Correa parece creer que en la dinámica de redistribución material –que su gobierno presenta como uno de sus principales logros[23]- está contenida la dimensión de reconocimiento moral y político con la que los sujetos consiguen inscribirse, de modo íntegro, en el proceso democrático de formación de la voluntad popular. El énfasis en la ampliación de los derechos sociales sin efectivo reconocimiento del valor público de las identidades políticas y de la contribución histórica de las fuerzas sociales a la producción y a la reproducción social tiende, no obstante, a restringir el margen de validez normativa de las pretensiones igualitarias de la agenda gubernativa.

El diálogo con el MIE -que desde 1990 se había "sentado" con todos los gobiernos de turno- solo fue posible, sintomáticamente, una vez que la beligerancia de la protesta, sobre todo en la Amazonía, llegara a tal nivel que hubo de registrarse la muerte de un manifestante. Ya en los diálogos, uno de los principales reclamos que la dirigencia indígena planteó al Presidente fue su falta de *respeto* al movimiento. El nuevo canal de televisión pública trasmitió en vivo la dura crítica indígena. Por primera vez en tres años de gobierno, Correa era obligado a reconducir su estilo de gestión política, más bien decisionista, a favor de la puesta en marcha de un proceso de negociación. Para inicios del 2010, sin embargo, las conversaciones fueron interrumpidas. Para la CONAIE, el gobierno no tomó en serio el proceso ni acogió sus principales demandas. El gobierno, por su parte, ha argumentado que la dirigencia indígena se atrinchera en una agenda parcial (étnica) que no toma en cuenta la globalidad del proceso político ni la orientación general de las políticas públicas.

Así, y a diferencia del bando neo-conservador, los actores sociales movilizados tienden a reconocer los avances de la constelación de políticas post-neoliberales esbozadas por el gobierno. Resienten sin embargo, por un lado, del activismo gubernativo y del relativo incremento del volumen de intervenciones públicas que no requieren necesariamente de la

[22] Por mandato constitucional hasta fines del 2009 debían aprobarse 16 leyes que viabilicen el proceso de transición institucional y el cambio de régimen de desarrollo. Hasta marzo 2010 solo han sido aprobadas 5.

[23] La reforma tributaria de carácter progresivo, el consistente aumento de la inversión en política social, y el incremento de la cobertura del ingreso familiar con relación a la canasta básica aparecen como elementos nodales de la agenda redistributiva del gobierno (Ver, Senplades, 2009).

intermediación del mundo asociativo. La voluntad gubernamental de ampliar la cobertura de las políticas públicas y de entrar en directa conexión con la sociedad desestructuran, así, las agendas políticas y organizativas de unas dinámicas de acción colectiva que, hasta hace poco, ponían por delante tácticas puramente reivindicativas en procura de algo más de protección y presencia estatal en los territorios. Por otro lado, y en el marco de las mismas tensiones abiertas por el retorno del Estado, indígenas, maestros, y universitarios –entre otros- condenan una línea de reforma que apuntaría a la des-corporativización de las instituciones públicas. En su perspectiva, la autonomía de las organizaciones sociales se juega en la preservación de los espacios de representación conquistados en determinados segmentos de la administración pública. Defienden entonces la legitimidad de la presencia de intereses e identidades políticas y gremiales *dentro* del Estado. Al así hacerlo toman distancia del universalismo de la Revolución Ciudadana y de su tendencia a colocar al ciudadano abstracto y a los actores organizados en un mismo plano de reconocimiento político.

En otro andarivel, algunos segmentos de dichos sectores empieza a expandir una retórica contraria a un patrón de desarrollo -aún cuando sea post-neoliberal y redistributivo- que se centra en formas convencionales de explotación de los recursos naturales. Sus planteamientos han abierto un prolífico e inédito debate entre diversas tendencias de la izquierda, gubernativa y no, sobre los modelos de desarrollo. El post-extractivismo está en el horizonte de estas tendencias. La discusión se centra en qué tipo de vías se escogen, en el presente, para viabilizar un nuevo eje de acumulación en las próximas décadas. La opción minera espanta incluso a altos funcionarios gubernamentales. Correa no parece ver más alternativas inmediatas a mano. La protesta anti-minera, fundada en dinámicas comunitarias de base campesina e indígena y articulada en redes ecologistas transnacionales, tenderá entonces a cobrar mayor ímpetu en los próximos años.

***

En suma, todo indica que a lo largo del año 2009 se ha desvanecido el ciclo en que la disputa entre el 'bloque del cambio' y el 'campo neo-conservador' organizó el conjunto de posiciones que trazaron las fronteras del juego político desde el acceso al poder de la Revolución Ciudadana. El combate a la 'partidocracia' (polarización simple) no funciona más como nodo articulador del conjunto de fuerzas y actores que resistieron al neoliberalismo y que hoy tratan de desmontarlo. Ciertas inconsistencias programáticas del régimen, su unilateralismo político, y el cortoplacismo de múltiples demandas gremiales desmigajan, y confrontan entre sí, al campo progresista. Las líneas de diferenciación y antagonismo entre tales segmentos caracterizarían la emergencia de un escenario de polarización compleja en el que las transacciones políticas entre las tres principales constelaciones enfrentadas amplían el marco de incertidumbre estratégica de todos los actores políticos y abren un interrogante sobre el futuro del proceso de cambio político en curso en el Ecuador del siglo XXI.

Solo una paciente política de articulación, debate y negociación puede, más que llegar a conciliar posiciones y a unificar bandos, volver arrojar luz sobre los intereses y los valores centrales que comparten entre sí las fuerzas democráticas. Sin dicho reconocimiento, la orientación de los antagonismos políticos continuará extraviándose hacia escenarios en que

las apuestas por el cambio tiendan a bloquearse mutuamente mientras se incuban tendencias a la turbulencia y a la inestabilidad política.

Bibliografía

Bretón, Víctor y Sara Báez, (2006), "El enigma del voto étnico o las tribulaciones del movimiento indígena: reflexiones sobre los resultados de la primera vuelta electoral (2006) en las provincias de la sierra", Revista Ecuador Debate, Quito, No. 69, diciembre, pp. 37-50.

Honneth, A., 1996, "La dynamique sociale du mépris. D'ou parle une théorie critique de la société?", in *Habermas, la raison, la critique*, C. Bouchindhomme y R. Rochlitz (dir.), Paris: Cerf, Paris, pp. 215-238.

Larrea, Gustavo, (2008), "Alianza País: una apuesta política novedosa", en *La innovación partidista de las izquierdas en América Latina*, F. Ramírez Gallegos (editor), Quito: ILDIS-FES.

PERFILES DE OPINIÓN, "Informes de monitoreo de opinión pública", 2008-2009, Quito.

Ramírez Gallegos, Franklin, (2010), "Innovación participativa, desconfianza política y abulia ciudadana", IFEA-PIEB, en prensa.

Ramírez Gallegos, Franklin (2005), *La insurrección de abril no fue solo una fiesta*, Quito: Ciudad-Terranueva-AbyaYala.

Ramírez Gallegos, Franklin, (2000), "Equateur: la crise de l'Etat et du modèle néo-libéral de développement", en *Problèmes d'Amérique Latine*, No. 36, janviers - mars, La documentation Française, Paris.

Rosanvallon, Pierre, (2006), *La contre-démocratie. La politique á l'age de la défiance*, Paris: Éditions du SEUIL (Edición en castellano, 2007, *La Contrademocracia. La política en la era de la desconfianza*, Buenos Aires: Manantial)

Senplades, 2009, *Recuperación del Estado Nacional para alcanzar el buen vivir*, Quito.